

Los cimientos y el edificio

Guillermo Valdés Castellanos

Se afirma que los populismos se originan en el descontento con la democracia; si bien ésta permite a las sociedades escoger libremente a sus gobernantes, ha fallado rotundamente en resolver las desigualdades y exclusiones crecientes, ni ha eliminado la corrupción y la violencia. Si las transiciones democráticas permitieron a muchos países deshacerse de regímenes autoritarios, pocas décadas después se ha comprobado que fueron insuficientes para construir sociedades más justas, prósperas, seguras y apegadas a derecho. En el caso de México es evidente que la transición democratizó el acceso al poder, pero no fue capaz de transformar el ejercicio del poder. Sus vicios permanecieron casi intactos.

El populismo llega al poder gracias a la democracia, pero en lugar de plantear una estrategia para perfeccionarla —reformular el ejercicio del poder con más democracia— lo que hace es desmontarla. La concentración de poder en el nuevo líder en detrimento de los otros poderes, órdenes de gobierno (estados y municipios) y de los órganos autónomos, es justificada como una necesidad para aplicar todo el poder del Estado en contra de los críticos y opositores.

En nuestro caso, no lleva ni tres años y AMLO ya se ha encargado de neutralizar a la mayoría de los organismos autónomos; además de someter a los legisladores de su partido al más vergonzante servilismo y amenazar a los jueces, amedrentar a gobernadores, medios, críticos y especialmente el acoso tan descarado como injusto al INE —recrudescido en los últimos días— son los datos que han levantado las señales de alerta. La democracia está en riesgo.

En ese intento por convertir al Ejecutivo en el único poder político real, sin límites legales ni contrapesos institucionales, neutralizar a la autoridad electoral es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto más allá del sexenio. En el corto plazo, a la 4T le es vital mantener la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y en el mediano plazo, condiciones ventajosas para volver a ganar la presidencia en 2024. Aniquilar la autonomía del INE y ponerlo al servicio del presidente es condición indispensable para neutralizar cualquier riesgo que provenga de la aplicación de la ley electoral: reglas para impedir la sobre representación en la Cámara de Diputados: desautorizar candidaturas cuando no cumplen la obligación de informar sus gastos de precampaña, o constreñir el discurso presidencial de la mañaneras.

Las decisiones anteriores del INE han afectado a la 4T, pero no por capricho, sino porque la ley así lo establece. La descalificación hecha por AMLO, por el presidente y legisladores de Morena no tiene sustento en la realidad; hay un deseo de venganza contra la institución desde 2006 (alegando un fraude que nunca pudo demostrar) y contra dos de sus consejeros a los que ya convirtió en miembros de un Supremo Poder Conservador (que solo existe en su imaginación). No hay argumentos ni evidencias de que la actuación del INE, de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama están fuera de la ley. Quieren un INE dócil y sometido a la 4T. Desvían el debate de la actuación ilegal de Morena al supuesto conservadurismo de los consejeros.

El hecho es que la 4T no confía en la democracia, es decir, no creen en las leyes electorales, ni en el voto libre de los ciudadanos, ni en la competencia partidista. Como saben que no pueden ser demócratas, tratarán de conservar la fachada de la democracia, como la sostuvo el PRI

durante 70 años, pero negando de facto la libertad y las condiciones para realizar elecciones libres.

Es cierto que nuestra democracia es muy imperfecta, pero para mejorarla, son necesarios e indispensables los cimientos —sistema de partidos, libertades, procesos electorales ciudadanizados; autoridades electorales autónomas, etc. — construidos en las últimas décadas y que costaron mucho trabajo y muchas vidas. Esos cimientos son los que están en riesgo. Sin ellos no se podrán construir más pisos de la vida democrática, la que urge: un sistema de partidos que no vea solo por sus intereses (no a la partidocracia); normatividad simplificada; gobiernos transparentes, que rindan cuentas y actúen apegados a derecho; una ciudadanía más amplia y extendida, más organizada, participativa y exigente de sus derechos; un Estado con capacidades financieras y administrativas para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos, sociales y económicos.